0000749

**ALEGATO FINAL
CASO MASACRE DE PLAN DE SÁNCHEZ**

Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos:

Susana Villarán y Santiago A. Canton, en nuestra calidad de Delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también "la Comisión" o "la CIDH"), nos dirigimos a la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos (en adelante también "la Corte"), con el objeto de presentar el alegato final y las conclusiones de la Comisión sobre el caso Masacre de Plan de Sánchez, contra la República de Guatemala (en adelante el "Estado", "Guatemala" ó el "Estado guatemalteco").

I. Introducción

Con base en las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención Americana"), la Comisión sometió el presente caso ante la Corte el 31 de julio de 2002, con el objeto de demandar al Estado guatemalteco por la denegación de justicia y otros actos de Intimidación y discriminación que afectaron los derechos a la integridad personal, a la libertad de creencias y religión y a la propiedad privada de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de 268 personas (en adelante "las víctimas"), en su mayoría miembros del pueblo indígena maya en la aldea Plan de Sánchez, Municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, ejecutada por miembros del ejército de Guatemala y colaboradores civiles, bajo tutela del ejército, el día domingo 18 de julio de 1982.

Como ha sido demostrado durante el proceso ante la Honorable Corte, la masacre de Plan de Sánchez fue perpetrada en el marco de una política genocida diseñada y ejecutada por el Estado de Guatemala con la intención de destruir, total o parcialmente, al pueblo indígena maya, bajo el manto de una absoluta impunidad. El Estado de Guatemala no ha realizado una investigación judicial seria y efectiva destinada a establecer oficialmente los hechos y la responsabilidad por los delitos cometidos, no ha juzgado a los responsables de la masacre ni ha sancionado a los autores materiales e intelectuales de los hechos denunciados. Hasta la fecha, el Estado de Guatemala no ha reparado los daños ocasionados mediante sus acciones y omisiones a las víctimas sobrevivientes de la masacre como tampoco a los familiares de las víctimas.

0000750

2

II. Sobre los alcances del reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado

Mediante Resolución de fecha 23 de abril de 2004, la Honorable Corte dio por retiradas las excepciones preliminares interpuestas por el Estado y admitió el reconocimiento de responsabilidad Internacional efectuado por el Estado por la violación de los artículos 1.1, 5.1, 5.2, 8.1, 11, 12.2, 12.3, 13.2 literal (a), 13.5, 16.1, 21.2, 24 y 25 de la Convención Americana. En virtud de lo anterior, la Honorable Corte dio por concluida la etapa de fondo, toda vez que decidió delimitar el objeto de la audiencia pública convocada mediante Resolución del 19 de febrero de 2004, "a las reparaciones y costas en el presente caso".

La Comisión valora muy positivamente el reconocimiento Internacional del Estado por las violaciones a los derechos consagrados en la Convención Americana invocados tanto por la Comisión en la demanda, como por los representantes de las víctimas en su escrito de argumentos y pruebas, tal y como da cuenta la citada Resolución del 23 de abril. La Comisión tuvo la oportunidad de manifestar dicha apreciación tanto en la audiencia pública, como en una misiva dirigida al Presidente de la República de Guatemala, Oscar Berger, en la que se refirió a los reconocimientos de responsabilidad efectuados por el Estado de Guatemala tanto en el presente caso como en el caso Molina Theissen, en los siguientes términos

La CIDH destaca la importancia de dichos reconocimientos como una medida de satisfacción crucial para la dignificación de las víctimas y de sus familiares, de especial connotación en los procesos de reconciliación nacional y de resarcimiento de las víctimas del conflicto armado interno. La reciente posición adoptada por el Estado en estos, no sólo son consistentes con la política de su Ilustre Gobierno en materia de derechos humanos, sino que de suyo constituyen acciones concretas que redundan en el fortalecimiento del sistema Interamericano de derechos humanos.²

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión considera procedente pasar a analizar los efectos jurídicos del reconocimiento de responsabilidad internacional formulado por el Estado en el presente caso, sobre los cuales destaca la importancia de un pronunciamiento de la Honorable Corte en virtud de lo siguiente:

En primer lugar, la Comisión observa que en la declaración efectuada en la audiencia pública el 23 de abril de 2004, el Estado se abstuvo de formular un allanamiento en los términos consagrados en el artículo 52(2) del Reglamento de la Corte, según el cual

Si el demandado comunicare a la Corte su allanamiento a las pretensiones de la parte demandante y a las de los representantes de las presuntas víctimas,

sus familiares o representantes, la Corte, oído el parecer de las partes en el caso, resolverá sobre la procedencia del allanamiento y sus efectos jurídicos.

Al respecto, conforme a la jurisprudencia de la Honorable Corte en esta materia,

El artículo 52 del Reglamento se refiere al supuesto en que un Estado demandado comunique a la Corte su allanamiento a los hechos y a las pretensiones de la parte demandante y, por consiguiente, acepte su responsabilidad internacional por la violación de la Convención, en los términos indicados en la demanda, situación que daría lugar a una terminación anticipada del proceso en cuanto al fondo del asunto, tal como lo establece el Capítulo V del Reglamento. La Corte advierte que con las disposiciones del Reglamento, que entró en vigencia el 1 junio de 2001, el escrito de demanda está compuesto por las consideraciones de hecho y derecho y las peticiones en cuanto al fondo del asunto y las solicitudes de reparaciones y costas correspondientes. En este sentido, cuando un Estado se allana a la demanda debe indicar con toda claridad si lo hace sólo sobre el fondo del asunto o si también abarca las reparaciones y costas. Si el allanamiento se refiere sólo al fondo del asunto, la Corte deberá evaluar si se continúa con la etapa procesal de determinación de las reparaciones y costas.²

En relación con las pretensiones plasmadas en la demanda, si bien la declaratoria de la Estado no indica que se allana a las pretensiones de la demanda, sí indica con toda claridad que reconoce la responsabilidad Internacional por las violaciones comprendidas en las consideraciones de la demanda, las cuales devienen de los hechos incluidos en el mismo libelo. En todo caso, la Comisión considera que el Estado guatemalteco acepta las consideraciones de hecho de la demanda, cuando en el numeral primero de su declaratoria "reitera el reconocimiento de responsabilidad del Estado de Guatemala en el presente caso, hecho por el anterior Presidente de la República, Licenciado Alfonso Portillo Cabrera el 9 de agosto de 2000". Como se puede observar, en dicha declaración el Gobierno de Guatemala expresamente aceptó "el acaecimiento de los hechos constitutivos que dieron lugar a la presentación de las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos",³ que no son otros que los incluidos por la Comisión en su demanda. Por lo tanto, la Comisión entiende que el Estado aceptó las peticiones en cuanto al fondo del asunto.

En segundo lugar, aún cuando el Estado de Guatemala no hizo un allanamiento expreso de la demanda, conforme al razonamiento de la Honorable Corte en el Caso Mack Chang, la aceptación de responsabilidad internacional por la violación de la Convención en los términos indicados en la demanda, como sucedió en el presente caso, daría lugar a una terminación anticipada del proceso en cuanto al fondo del asunto. Adicionalmente, la Comisión entiende que la declaratoria de aceptación de la responsabilidad

² Corte IDH, Caso Myrna Mack Chang, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 106.

³ Véase documento "Declaración del Gobierno de la República de Guatemala en atención de los

internacional en los términos plantados por el Estado de Guatemala surte plenos efectos jurídicos a la luz del derecho internacional, equiparables a los del allanamiento contemplado en el artículo 52(2) del Reglamento de la Honorable Corte en lo que tiene que ver con el fondo del asunto y así le solicita que lo declare en su sentencia.

III. Hechos establecidos

No obstante lo anterior, en el evento de que la Honorable Corte considere procedente aplicar las facultades conferidas por el artículo 54 de su Reglamento a los efectos de establecer la verdad de los hechos y las consecuencias jurídicas que se derivan de los mismos, la Comisión destaca que los hechos que a continuación se relacionan se encuentran plenamente establecidos mediante la prueba documental aportada por la Comisión y los representantes de la víctima en las oportunidades procesales correspondientes, así como de la prueba testimonial recogida por la Honorable Corte de manera directa en la audiencia pública. Asimismo, mediante el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala, memoria del silencio (CEH) y el Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, "Guatemala: Nunca más: los mecanismos del horror (REMHI)", entre otros.

Entre otros hechos, ha quedado plenamente establecido:

Que en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1982, agentes del Estado de Guatemala ejecutaron actos de genocidio en contra del pueblo maya que residía en las regiones Ixil, Zacualpa, Huehuetenango y Rabinal.

Que el período más violento del conflicto armado se registró entre los años 1978-1983, durante los gobiernos de los generales Romeo Lucas García (1978-1982) y Efraín Ríos Montt (1982-1983).

Que en dicho período la política contrainsurgente⁴ en Guatemala se caracterizó por acciones militares destinadas a la destrucción de grupos y comunidades como tales, así como al desplazamiento geográfico forzado de comunidades indígenas cuando se las consideraba posibles auxiliares de la guerrilla. La necesidad estatal de desestructurar la organización social y acabar con los valores y elementos tradicionales de cohesión comunitaria, derivó en el genocidio y la táctica de tierra arrasada.⁵

⁴ La política contrainsurgente entre 1978 y 1983 puede dividirse en tres fases. a) Fase selectiva (1978-1981), donde el objetivo principal de las operaciones militares fueron individuos determinados. b) Fase colectiva y masiva entre 1981 y 1982, período en cual se produjeron el mayor número de masacres. c) Fase de desarrollo y estabilidad, en 1983. La población desplazada fue realojada en pueblos modelos y polos de desarrollo supervisados por el Ejército. En escrito de denuncia de los peticionarios.

Que las acciones militares, ejecutadas con conocimiento o por orden de las más altas autoridades del Estado, consistieron principalmente en masacres,⁶ operaciones de tierra arrasada,⁷ desapariciones forzadas, violaciones sexuales de mujeres individual y masiva, ejecuciones selectivas de líderes y guías espirituales, así como destrucción de centros ceremoniales y lugares sagrados, entre otras.

Que, Rabinal, uno de los ocho municipios de Baja Verapaz, departamento situado en la parte central de Guatemala, está situado en el límite entre zonas donde habitan diversos grupos étnicos (achíes, quichés y pocomchíes). Por sus características geográficas, y dado que la guerrilla utilizó el área como un corredor de abastecimiento logístico, reclutamiento y retaguardia, el ejército consideró Rabinal como un área estratégica y determinó su sometimiento a control pleno.

Que, por tal motivo, desde inicios del año 1982 el Ejército de Guatemala mantuvo una fuerte presencia en la zona de Rabinal, incluyendo la aldea Plan de Sánchez y comunidades vecinas y que con posterioridad a la masacre esa presencia se mantuvo por varios años, atemorizando a los sobrevivientes e inhibiéndolos de realizar cualquier gestión ante las autoridades para que se investigara lo ocurrido y se sancionara a los culpables. Los comisionados militares y soldados preguntaban periódicamente en las comunidades de la zona, sobre los desplazamientos de los residentes hombres, intimidando a los miembros de la población local, especialmente a las mujeres, amenazando con armas a toda una comunidad.

Que, el día domingo, "día de mercado", es tradicionalmente el día para compra y venta de productos en la plaza de Rabinal, al que acudían un porcentaje alto de residentes del municipio y de municipios vecinos.

Que, aproximadamente a las 8 de la mañana del 18 de julio de 1982 fueron lanzadas dos granadas hacia la comunidad Plan de Sánchez, las que cayeron al este y al oeste de la aldea.

Que, entre las 2:00 y las 3:00 p.m., llegó a Plan de Sánchez un grupo de alrededor de 60 hombres⁸ compuesto por oficiales y soldados que vestían uniformes militares y portaban rifles de asalto, comisionados militares, judiciales, denunciadores civiles y patrulleros. Dicho destacamento procedió a detener a las personas que se encontraban en la aldea, quienes fueron

⁶ La CEH registró 626 masacres cometidas por las fuerzas del Estado durante el conflicto armado, principalmente el Ejército, apoyado por estructuras paramilitares tales como las Patrullas de Autodefensa Civil, los Comisionados Militares y los Judiciales.

⁷ Las llamadas operaciones de tierra arrasada significaron el desplazamiento forzado de la población civil como consecuencia de la represión ejercida en su contra, a través de asesinatos y la destrucción sistemática de las cosechas y propiedades.

⁸ Véase "Las Masacres de Rabinal. Estudio histórico antropológico de las masacres de Plan de

concentradas en una casa del lugar, a la que fueron también confinadas personas de otras comunidades que pasaban por el lugar a su regreso de la plaza.

Que, a los detenidos les dispararon con armas de fuego, primero a los adultos y luego uno a uno a los niños, que no fueron muertos a patadas y golpes dados por los soldados. En los mismos hechos los agentes del Estado procedieron a lanzar granadas hacia el interior de la casa.

Que, tanto a la casa como a los cuerpos se les impregnó de un combustible, procediendo a incendiar el lugar.

Que, las personas que no fueron encerradas en la casa, fueron asesinadas en el patio. Que las niñas y jóvenes de la comunidad de Plan de Sánchez fueron detenidas en otro lugar y fueron violadas, torturadas y posteriormente asesinadas.

Que, a la mañana del 19 de julio de 1982, los sobrevivientes, familiares y vecinos acudieron al lugar de la masacre. Encontraron la casa aún humeante y pudieron constatar que la mayor parte de los cadáveres estaban incinerados y otros estaban siendo devorados por perros. Los cuerpos de las mujeres fueron encontrados desnudos en el mismo plano en el que fueron ejecutadas.

Que, los comisionados militares dieron a los sobrevivientes y familiares una hora para enterrar los cuerpos bajo la amenaza de bombardear la comunidad.

Que, los cuerpos fueron enterrados sin dignidad donde la misma tierra había sido violada. En unas fosas fueron depositados los restos calcinados, en otras los restos semi-calcinados y los que no presentaban exposición al fuego.

Que los soldados regresaron varias veces, los días siguientes, para saquear las casas, destruir las viviendas de las familias, robar sus pertenencias, efectos personales, comida y animales, así como amenazar a los pobladores que habían retornado.

Que, el 10 de diciembre de 1992 se denuncia la existencia de un cementerio clandestino. El 7 de mayo de 1993 el Procurador de Derechos Humanos denunció la masacre ante el Ministerio Público. El 6 de junio de 1994 se autorizó al Equipo de Antropología Forense de Guatemala a realizar la exhumación de los restos ubicados en 21 fosas. El 10 de agosto de 1994 la PDH solicitó la ampliación de la diligencias de exhumación a la fosa #22 y sólo hasta el 6 de mayo de 1996 el Juzgado de Primera Instancia de Salamá autorizó la segunda exhumación.

0000755

7

Que, sólo hasta 12 años después de ocurrida la masacre de Plan de Sánchez, los sobrevivientes y familiares pudieron enterrar a sus muertos de acuerdo a las creencias y tradiciones espirituales mayas.

Que 22 años después de la masacre los autores responsables no han sido judicialmente individualizados, juzgados ni sancionados. En relación con la actividad de las autoridades judiciales y los mecanismos por medio de los cuales las autoridades militares han obstruido la investigación de los hechos, el siguiente cuadro resulta especialmente ilustrativo.

MASACRE PLAN SÁNCHEZ			
PROCESOS JUDICIALES Nos. 391/93 Y 344/95			
INFORMACIÓN APORTADA Y SOLICITADA POR LOS QUERRELLANTES	FECHAS	ACTIVIDAD DE LAS AUTORIDADES JUDICIALES	RESPUESTA DEL MINISTERIO DE DEFENSA
Solicita información sobre: Estructura Jerárquica del Ejército; nombre de los miembros de la patrulla militar que efectuó la masacre; identificación de los oficiales a cargo de la patrulla; y determinación de los responsables	Feb. 13, 1997	Ninguna	
En su declaración los querellantes identifican como autores materiales de la masacre a: 4 soldados, un Comisionado Militar Moisés Manuel, 9 miembros de la G-2 y a dos oficiales militares que dirigían la patrulla	Mayo 27, 1997	Ninguna	
Solicita al Ministerio Público que requiera información al Ministerio de Defensa sobre los miembros de la patrulla	Mayo 27, 1997 Junio 4, 1997 Agosto 28, 1997	Noviembre 12, 1997 el Ministerio Público cumple orden judicial y requiere información al Min. de Defensa	Ninguna
Solicita que tramite ante el juez orden de captura contra imputados	Junio 18, 1997	Ninguna	
Solicita ampliación de información sobre estructura jerárquica del Ejército	Nov. 24, 1997	Nov. 25, 1997 el Juez ordena solicitar información al Min. de Defensa	Ninguna
Reitera solicitud al Ministerio Público que requiera información al Ministerio de Defensa sobre	Enero 21, 2000 Mayo 12, 2000	Ninguna	

III. Efectos de la masacre de Plan de Sánchez

"El tiempo nunca será suficiente para sanar las cicatrices que esa violencia ha heredado a hombres, jóvenes, niños, ancianos y especialmente a mujeres. A nuestros familiares se les cortó su ciclo de vida, fueron torturados, desaparecidos, secuestrados y masacrados. Ellos y ellas encontraron una muerte adelantada, violenta y desconocida, sus cuerpos están en los cientos de cementerios clandestinos, ubicados en los barrancos, caminos, bosques, bajo edificios ya destruidos que no nos permite llegar a ellos para exhumarlos. Otros fueron devorados por animales y otros fueron tirados en lagos, ríos como el Motagua, Plxcayá, Usumacinta y cráteres de volcanes. Esta situación no permite y no permitirá llegar a ellos. Éste es el gran calvario para muchas familias, esposas, padres, hijos y nietos sobrevivientes del genocidio cometido por militares en Guatemala"⁹

Como se indicó, mediante la prueba documental y testimonial que obra en el expediente, se encuentra suficientemente establecido que la masacre de Plan de Sánchez fue ejecutada por agentes del Estado guatemalteco en el marco de una política genocida y que se encuentra impune. Efectivamente, han transcurrido más de 22 años desde la masacre y más de 10 de haberse iniciado los procesos penales correspondientes y los sobrevivientes y los familiares de las víctimas aún esperan que se sancione a los responsables de tales hechos.

Los testimonios de los testigos sobrevivientes de la masacre y las declaraciones de los peritos que ante la Honorable Corte expusieron durante el transcurso de la audiencia pública, evidenciaron la magnitud de los hechos acaecidos el 18 de julio de 1982, la dimensión de los acontecimientos posteriores y los efectos que hasta el presente perduran.

La Honorable Corte tuvo la oportunidad de escuchar los dolorosos detalles de la masacre de la voz de testigos presenciales, de los pocos miembros de la comunidad indígena maya-achí que lograron salvar sus vidas aquel 18 de julio de 1982. Asimismo, la Honorable Corte pudo conocer los esfuerzos realizados por los sobrevivientes y por los familiares de las víctimas para encontrar justicia en Guatemala. Como se desprende de la prueba que obra en el expediente, ellos conocen los nombres de militares, patrulleros y comisionados militares que participaron en la masacre, saben incluso donde viven, entregaron esa información a los tribunales, sin embargo, 22 años después, nada, la justicia guatemalteca no ha sido capaz de investigar, de juzgar y de sancionar a los responsables.

El día 18 de julio de 1982 miembros del Ejército de Guatemala junto a colaboradores civiles asesinaron y destruyeron una comunidad indígena maya-achí de una forma tan cruel, tan brutal, que horroriza la conciencia

⁹ "De la guerra a la paz: Un proceso lento, difícil y traumatizante." Intervención de Rosalina

humana. Para quienes ostentaban el poder en la época, la vida del indígena no tenía valor. En ese sentido resulta particularmente ilustrativo las palabras en 1982 del vocero del gobierno de facto de Efraín Ríos Mont.

La guerrilla se ha traído muchos colaboradores indios, por lo tanto los indios son subversivos. ¿Y cómo combatir la subversión? Evidentemente matando a los indios.¹⁰

Sólo desde el racismo, como doctrina de superioridad, se puede hallar una explicación para intentar comprender el asesinato masivo, los grados de crueldad, la forma como asesinaron a las mujeres, ancianos, niños y niñas de Plan de Sánchez, violaron, torturaron y asesinaron a sus adolescentes, destruyeron sus casas, sus siembras, sus bienes, impidieron a los sobrevivientes enterrar a sus seres queridos de acuerdo a sus costumbres y los persiguieron durante años porque eran indígenas, porque eran maya achí.

Durante el conflicto armado el pueblo maya fue víctima de violaciones masivas y crueles a sus derechos humanos que se manifestaron en masacres, operaciones de tierra arrasada,¹¹ secuestros, ejecuciones de autoridades, líderes y guías espirituales que afectaron la vida e integridad física de sus miembros, comunidades y la identidad étnica o cultural del propio pueblo. De los casos de víctimas individuales identificados por la Comisión de Esclarecimiento Histórico, el 83.3% eran mayas.¹² Al respecto la CEH expresó:

La percepción, por el Ejército, de las comunidades mayas como aliadas naturales de la guerrilla, contribuyó a incrementar y a agravar las violaciones de derechos humanos perpetradas contra el pueblo maya, evidenciando un agresivo componente racista, de extrema crueldad, llegando al exterminio masivo de comunidades mayas inermes a las que se atribuía vinculación con la guerrilla, incluyendo niños, mujeres y ancianos, aplicando métodos cuya crueldad causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado.¹³

¹⁰ Véase en demanda de la CIDH ante la Honorable Corte Interamericana en el caso 11.763 "Masacre de Plan de Sánchez" contra a República de Guatemala, párrafo 59.

¹¹ Mediante las masacres y operaciones de tierra arrasada, planificadas por las fuerzas del Estado, se exterminaron por completo comunidades mayas, así como se destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y otros elementos de sobrevivencia. La CEH registró 626 masacres atribuibles a estas fuerzas. Véase en "Guatemala: Memoria del Silencio", Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), 1999.

¹² Un coronel retirado del Ejército declaró ante la CEH: "La población indígena fue la más afectada porque es la mayoría". Sin embargo, si se compara la composición étnica de la población nacional con la composición étnica de las víctimas registradas por la CEH, se verá una alta sobrerepresentación de indígenas mayas entre las víctimas. Según los censos oficiales, los indígenas bordean el 43% de la población total, y las víctimas mayas identificadas que registra la CEH representan casi el doble de tal cifra, el 83.3%. Si nos atenemos a las cifras no oficiales de población, éstas atribuyen un porcentaje del 61% a los indígenas, cifra que de igual modo es superada en un tercio por el porcentaje de víctimas indígenas identificadas. Véase en "Guatemala: Memoria del Silencio", Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), 1999.

La CEH registró 626¹⁴ masacres cometidas por las fuerzas del Estado durante el conflicto armado, principalmente el Ejército, apoyado por estructuras paramilitares tales como las Patrullas de Autodefensa Civil, los Comisionados Militares y los Judiciales. El 95% fueron perpetradas entre 1978 y 1984 y en este período el 90% fueron ejecutadas en áreas habitadas predominantemente por el pueblo maya.¹⁵

En el área de Rabinal las masacres fueron actos masivos dirigidos discriminadamente en contra de la población maya-achí.¹⁶ La masacre de Plan de Sánchez fue una de éstas, los mataron porque eran maya-achí. La Comisión considera que es justamente esa misma razón la que impide el juzgamiento de los responsables de la masacre y asegura la denegación de justicia de la que ha sido víctima la comunidad de Plan de Sánchez por más de veinte años.

La CIDH en sus informes sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala ha sostenido en reiteradas ocasiones que los pueblos indígenas -maya, garifuna y xinca- han sido históricamente discriminados por razones étnicas.¹⁷ En el Informe "*Justicia e Inclusión Social: Los desafíos de la Democracia en Guatemala*", publicado en el mes de marzo de 2004, subrayó que la impunidad por graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno en contra del pueblo maya y sus miembros alcanzaba niveles de tal magnitud que obligaba a concluir que los rezagos de una cultura racista y discriminatoria continuaba permeando amplios sectores y ámbitos de la sociedad guatemalteca, reflejándose en forma especial en el sistema de administración de justicia.¹⁸

Como pudo evidenciar la Honorable Corte, los tres testigos que declararon ante ella en el mes de abril de 2004 expresaron que ser indígena, ser maya en Guatemala, equivale a desprecio, a que no los consideren, a que no los tomen en serio, a que los consideren ignorantes, a que no valoren su cultura. Ellos viven el racismo y la discriminación, en las miradas, en el trato, en la denegación de justicia. "Ya es tiempo que la raza maya tenga

¹⁴ De acuerdo a información recibida por la CIDH, esta cifra de 626 masacres podría aumentar considerablemente. Efectivamente, en virtud del trabajo realizado por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, de más de 300 exhumaciones realizadas por la Fundación aproximadamente sólo la mitad corresponden a las registradas por la Honorable Corte. Esto se debe a que con el paso de los años los sobrevivientes han ido perdiendo el miedo para denunciar los cementerios clandestinos que quedaron como testimonio de la crueldad del conflicto armado interno en Guatemala.

¹⁵ Véase en "Guatemala: Memoria del Silencio", Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Conclusiones y Recomendaciones, 1999.

¹⁶ CEH, Tomo III, Capítulo Genocidio, párrafo 3385.

0000759

11

derechos como los ladinos", expresó Narcisa Corazón ante la Honorable Corte.

Es bien conocido que en Guatemala ha habido racismo y discriminación en contra de los pueblos indígenas.¹⁹

En Guatemala el genocidio, -manifestación exacerbada del racismo-, contra el pueblo maya durante el conflicto armado se reveló de diversas formas, todas de un grado tal de crueldad, que "causa horror en la conciencia moral del mundo civilizado".²⁰ Según la CEH agentes del Estado de Guatemala, en el marco de las operaciones contrainsurgentes realizadas entre los años 1981 y 1983, ejecutaron actos de genocidio en contra de grupos del pueblo maya que residía en cuatro regiones analizadas por la CEH, que incluyó a los maya-achí de Rabinal.²¹ Esta conclusión de la CEH se basó en la evidencia de que, a la luz de lo dispuesto en el Artículo II de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, hubo matanzas de miembros de los grupos mayas (Artículo II, letra a), lesiones graves a su integridad física o mental (Artículo II, letra b) y actos de sometimiento intencional de los grupos afectados a condiciones de existencia que acarrearón o pudieron haber acarreado su destrucción física total o parcial (Artículo II, letra c). Se basa también en la evidencia de que todos esos actos fueron perpetrados "con la intención de destruir total o parcialmente" a grupos identificados por su etnia común, en cuanto tales, con independencia de cuál haya sido la causa, motivo u objetivo final de los actos (Artículo II, primer párrafo). La CEH tiene información de que hechos análogos ocurrieron y se reiteraron en otras regiones habitadas por el pueblo maya.²²

Los hechos registrados por la CEH por los que se violó el derecho a la vida y la integridad del pueblo maya, entre otros, son:²³

a) Los actos probados de genocidio contra varios grupos etnolingüísticos.

¹⁹ Declaración del perito Augusto Willamsen-Díaz ante la Corte Interamericana en la audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

²⁰ Véase en "Guatemala: Memoria del Silencio", Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Conclusiones y Recomendaciones, 1999, Párrafo 85.

²¹ Las cuatro regiones geográficas seleccionadas por la CEH fueron: Maya-Q'anjob'al y Maya-Chuj, en Baril as, Nentón y San Mateo Ixtatán del Norte de Huehuetenango; Maya-Ixil, en Nebaj, Cotzal y Chajul, Quiché; Maya-K'iche' en Joyabaj, Zacualpa y Chiché, Quiché; y Maya-Achi en Rabinal, Baja Verapaz. Véase en "Guatemala: Memoria del Silencio", Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Conclusiones y Recomendaciones, 1999, Párrafo 110.

²² Véase en "Guatemala: Memoria del Silencio", Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Conclusiones y Recomendaciones, 1999, Párrafos 122 y 123.

b) La denominada política de tierra arrasada. Ésta fue una modalidad extrema de violación a la vida y la integridad de los colectivos indígenas. Incluía la muerte de las personas, la quema de casas, campos de cultivo y la destrucción completa de aldeas.

c) Las masacres en comunidades, seguidas de persecución, y muerte de la población sobreviviente en la huida, dan cuenta de una intención de destrucción total. La mayor parte de las masacres acaecidas a lo largo del enfrentamiento, y casi la totalidad de las que se consumaron en el período más álgido del mismo, fueron efectuadas contra mayas, y guardan relación estrecha con los planes de campaña del Ejército.

d) La muerte selectiva de líderes y dirigentes comunitarios y de organizaciones mayas, así como la desaparición forzada, tuvieron como efecto desarticular las formas de organización comunitarias, y por ende, la capacidad de respuesta de las comunidades ante la represión, dejándolas indefensas frente a diversas formas de ataque.

e) La muerte de ancianos, mujeres y niños, producida directamente o como consecuencia de la represión, ha afectado la reproducción de la cultura y la posibilidad de la continuidad biológica y cultural.

f) Una de las formas más cruentas de desvalorización de la vida que registró la CEH, fueron algunos actos de coprofagia y antropofagia que se realizaron dentro de la estrategia contrainsurgente. Estos actos de crueldad extrema fueron efectuados por elementos del Ejército, quienes también obligaron a personas detenidas a realizarlos. En los casos testimonados ante la CEH, las víctimas fueron miembros de comunidades indígenas.

g) La violación sexual de mujeres, individual y masiva, además de la afectación directa contra las mujeres tuvo profundas repercusiones en el colectivo. El 88.7% de violaciones sexuales de víctimas individuales identificadas registradas por la CEH fueron cometidas contra mujeres mayas, el 10.3% contra ladinas y el 0.1% contra otras.

“Las pobres patojas fueron violadas, degolladas, torturadas y baleados”.²⁴

Los testimonios y dictámenes presentados ante la Honorable Corte Interamericana durante la audiencia demostraron que en Plan de Sánchez se ejecutaron, salvo actos de coprofagia y antropofagia, todas las mencionadas manifestaciones de violación al derecho a la vida y a la integridad física, a través de las cuales se pretendió exterminar por completo a la comunidad. Asesinaron a sus miembros, destruyeron sus viviendas, ganado, cosechas y

herramientas de producción, robaron el dinero y las prendas de valor. El objetivo fue destruir y provocar terror.

La masacre significó la muerte de cientos de personas, la destrucción de familias e implicó graves consecuencias económicas, sociales y culturales que hasta el día de hoy sufren los sobrevivientes y los familiares de las víctimas.

El perito Augusto Willamsen-Díaz durante la audiencia celebrada en el mes de abril ante la Honorable Corte expresó respecto de los efectos de la masacre lo siguiente:

La muerte de cientos de personas, consecuencias económicas, sociales y culturales de mucha profundidad. El pueblo indígena queda afectado traumáticamente por todo esto. Se instaura la política de tierra arrasada, con destrucción biológica y material de las comunidades. Métodos que traumatizaron la conciencia colectiva y la identidad cultural de los sobrevivientes y familiares, que se ven obligados a huir de sus tierras, a abandonar las estructuras comunitarias tradicionales, a vivir en temor bajo control militar.

La organización social del pueblo de Plan de Sánchez, básicamente conformada por redes y tejidos de estructura, de sistemas de parentesco extenso y nuclear en comunidad. La desestructuración a ese nivel nuclear provoca crisis y ruptura, como la mayoría de los habitantes de Plan de Sánchez fueron asesinados en la masacre también se afectó profundamente la organización comunitaria. Se desestructuró la comunidad misma que entró en crisis y la sufrió profundamente.²⁵

En Plan de Sánchez los sobrevivientes fueron testigos del asesinato de sus familias; de la destrucción de su Comunidad; se les negó el derecho de enterrar a sus muertos; fueron perseguidos y durante años tuvieron que vivir escondidos en las montañas.

Se hizo un entierro salvajísimo, porque fueron recogidos con azadones, con palas en la excavación que hicieron los demás de la patrulla.²⁶

Los sobrevivientes que quedamos en esa Comunidad tuvimos que organizarnos para poder defender nuestra la vida, tuvimos que escondernos en el área de nuestra comunidad, en el monte.²⁷

*En ese tiempo no se permitía que alguien pudiera hablar de lo que había pasado.*²⁸

²⁵ Declaración del perito Augusto Willamsen-Díaz ante la Corte Interamericana en la audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

²⁶ Testimonio de Juan Manuel Jerónimo ante la Corte Interamericana en audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

²⁷ Testimonio de Juan Manuel Jerónimo ante la Corte Interamericana en audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

0000762

Durante la audiencia pública celebrada en el mes de abril ante la Honorable Corte, el perito Augusto Williamsen-Díaz se expresó en detalle sobre la forma del rito en caso de muerte en la cultura en la Comunidad maya-achí de Plan de Sánchez y se refirió a la importancia de estos ritos para la cultura maya en general y los maya-achí, en particular.

Para la cultura maya el que muere vuelve a nacer y para eso es muy importante ser enterrado con todos estos ritos. El espíritu se va con sus antepasados. Si no se cumplen con los ritos y costumbres, los espíritus deambulan perdidos. [...] Si no se le prepara y entierra bien no tiene posibilidad de mantenerse en contacto, como debe ser, con los vivos, con los espíritus de los abuelos, con la gente que ha muerto antes que él y con las generaciones venideras y se le obstaculiza su vuelta a nacer, a vivir nuevamente.²⁹

Los sobrevivientes no pueden encontrar explicaciones para comprender por qué asesinaron a sus seres queridos, a la crueldad ejercida por el Ejército. Buscan explicar la causa de la masacre en causas locales muchas de las cuales se originan en sentimientos de culpa promovidos, en palabras de la perito Nieves Gómez, "como un mecanismo para evitar identificar a los verdaderos responsables debido a que los victimarios gozan de algún tipo de prerrogativas y mantienen el control social".³⁰ Es evidente que debido a las precarias condiciones en las que tuvieron que esconderse para salvaguardar sus vidas, los sobrevivientes no podían imaginar que no sólo mataron a los maya-achí de Plan de Sánchez, sino también a los maya-achí de todo Rabinal, los maya-Ixil de Nebaj, Costal, los maya-K'iché de Joyabaj, Zacualpa y Chiché, los maya-Q'anjob'al y maya-chuj de Barillas, Nentón.

La masacre de Plan de Sánchez, la persecución de los sobrevivientes, la negación de la justicia produjo efectos a nivel individual y colectivo y, en este caso, los efectos del nivel comunitario tienen una especial dimensión porque se buscó una comunidad étnicamente diferenciada, con una historia ancestral.

Respecto de los efectos individuales, los testimonios de los sobrevivientes de la masacre Juan Manuel Jerónimo, Narcisa Corazón y Buenaventura Manuel Jerónimo, permitieron acercarse el dolor que ellos sintieron y que permanece.

²⁸ Testimonio de Juan Manuel Jerónimo ante la Corte Interamericana en audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

²⁹ Declaración del perito Augusto Williamsen-Díaz ante la Corte Interamericana en la audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

Para mí los 22 años que han pasado desde la muerte de nuestra madre, hijos, esposa es como si fuera hoy en la mañana, el día de ayer, la vivo todo el tiempo.³¹

En relación con los daños psicosociales, se estableció con los testimonios de los testigos sobrevivientes de la masacre y con las declaraciones de los peritos que, al menos, se causaron los siguientes:³²

- Se afectaron los roles comunitarios de tal forma que se logró la desarticulación de la comunidad.
- Se destruyeron los roles familiares.
- Se dañó la identidad cultural de la comunidad. Se produjo un vacío cultural con la muerte de las mujeres y los ancianos.
- La memoria y dignidad de las mujeres como transmisora y procreadora del grupo quedó dañada de forma cultural, social, familiar e individual.
- El duelo comunitario fue alterado gravemente.
- Se sustituyeron las normas y valores tradicionales por normas y autoridades militares, alterándose gravemente el tejido social comunitario tradicional.
- En virtud del clima de tensión y terror posterior a la masacre, las relaciones de confianza comunitarias quedaron deterioradas, cuestión que hasta la fecha se mantiene.

Asimismo, se encuentra acreditado que se afectó la identidad cultural de la comunidad en grado tal que, a juicio del perito doctor Augusto Willensem Díaz, podría ser irreparable. ¿Cómo reparar la pérdida de los ancianos y mujeres que eran los transmisores de la cultura ancestral?

Al respecto, la Honorable Corte en sus sentencias se ha referido al proyecto de vida de las víctimas de violaciones de derechos humanos. En el presente caso, también se afectó el proyecto de vida comunitario de Plan de Sánchez.

Conforme a las conclusiones de la experta Nieves Gómez

³¹ Testimonio de Juan Manuel Jerónimo ante la Corte Interamericana en audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

0000764

16

El proyecto de vida comunitario de Plan de Sánchez y las comunidades aledañas quedó gravemente dañado por la desarticulación del grupo y la pérdida de referentes al interior del grupo, la eliminación de líderes y roles y la destrucción de la cultura. De ello se produjo una gran desorientación, una ausencia de personas de referencia, una falta de percepción de control en sus vidas y su entorno, y gran inseguridad.

Finalmente, ha quedado igualmente acreditado que a los sobrevivientes y familiares de las víctimas se les ha negado el derecho a la justicia y ellos lo reclaman, para sí, para su comunidad, para el pueblo maya. En palabras de la misma experta

El daño ha generado una ruptura en el proyecto de vida comunitario, que hoy en día se va reconstruyendo con dificultad por la falta de justicia, de reconocimiento del daño sufrido, la falta de memoria hacia las víctimas y la falta de resarcimiento.

Los tribunales de justicia guatemaltecos no han individualizado, juzgado y mucho menos condenado a los autores intelectuales y materiales de la masacre quienes se encuentran en absoluta impunidad. La impunidad de los responsables de la ejecución de una política genocida en contra del pueblo maya manifestada en la Masacre de Plan de Sánchez, a través de la brutal ejecución extrajudicial de mujeres, niñas, niños y ancianos continúa provocando daño no sólo en los sobrevivientes y familiares de las víctimas sino a todo el pueblo maya.

IV. Medidas de reparación

La Convención Americana señala en el artículo 63(1) que la Corte

Dispondrá que se garantice a las partes lesionadas en el goce de sus derechos y libertades conculcados. Dispondrá, asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de estos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.

La Honorable Corte ha señalado que el artículo 63(1) "constituye una norma consuetudinaria que es, además, uno de los principios fundamentales del actual derecho internacional".³³ Las obligaciones derivadas del artículo 63(1) están regidas por el derecho internacional en todos los aspectos pertinentes y una sentencia dictada de conformidad a esta norma conlleva "que no pueden ser modificadas ni suspendidas por el Estado obligado."³⁴

³³ Véase, Caso Aloeboetoe y otros, Reparaciones, Sentencia del 10 de septiembre de 1993, Ser. C Nº 15, párrafo 43, que cita, entre otros, el Caso Velásquez Rodríguez, Indemnización Compensatoria, Sentencia del 21 de julio de 1989, Ser. C Nº 7, párrafo 25; Caso Godínez Cruz, Indemnización Compensatoria, Sentencia del 21 de julio de 1989, Ser. C Nº 8, párrafo 23; véase también, Caso El Amparo, Reparaciones, Sentencia del 14 de septiembre de 1996, Ser. Nº 28 C, párrafo 14, que cita, entre otros, Factory at Chorzów, Jurisdicción, Judgment Nº 8, 1927, P.C.I.J. Series A, Nº 9. Pág. 21 y Factory at Chorzów, Merits, Judgment Nº 13, 1928, P.C.I.J., Series A, Nº 17 pág. 29; Reparations for Injuries

Conforme a la jurisprudencia reciente de la Honorable Corte,

La reparación del daño ocasionado por la infracción de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la plena restitución (*restitutio in integrum*), la cual consiste en el restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, [...] cabe al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, además de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados.³⁵

En atención tanto al tiempo transcurrido, así como a la naturaleza y magnitud de los daños ocasionados, la Comisión considera en el presente caso, no es posible que opere una restitución plena. Por lo tanto, corresponde a la Honorable Corte determinar las medidas dirigidas, no sólo a garantizar los derechos conculcados, sino a reparar las consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer el pago de una indemnización como compensación por los daños ocasionados.³⁶

La Honorable Corte ha señalado que las medidas de reparación tienden a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas.³⁷ Dichas medidas comprenden las diferentes formas en que un Estado puede hacer frente a la responsabilidad internacional en la que incurrió, que conforme al derecho internacional consisten en medidas de restitución, indemnización, rehabilitación, satisfacción y medidas de no repetición.³⁸

La Comisión se permite destacar una vez más el carácter colectivo del presente caso, que como ha sido demostrado implicó gravísimos daños a la comunidad de Plan de Sánchez en la ejecución de una política genocida. Los testigos escuchados en la audiencia pública indicaron a la Honorable Corte que ellos representaban a todos los miembros de su comunidad que habían sido víctimas de la masacre del 18 de julio de 1982 y de su pueblo maya achí que fue objeto de actos que la CEH ha calificado como genocidas.

He venido hasta acá por todos los que no pueden venir a expresar su dolor como yo lo estoy expresando. No dejen que se congele.³⁹

³⁵ Véase, Caso Maritza Urrutia, sentencia de 27 de noviembre de 2003; Caso Mack Chang, sentencia de 25 de noviembre de 2003, párr. 236.

³⁶ Véase, Corte IDH, Caso *Bámaca Velásquez*, sentencia de reparaciones del 22 de febrero de 2002, párr. 39.

³⁷ Véase, Corte IDH, Caso Los Niños de la Calle, sentencia de reparaciones del 26 de mayo de 2001, párr. 63.

³⁸ Véase, el Informe realizado por Theo Van Boven, Relator Especial de las Naciones Unidas para la Restitución, Compensación y Rehabilitación de las Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. UN Doc. E/CN.4/Sub2/1990/10 (26 julio de 1990)

0000766

En efecto, tanto los testimonios como los peritazgos que escuchó la Honorable Corte en la audiencia pública, ofrecen elementos muy claros sobre la magnitud de los actos ilícitos cometidos, consecutivos y complejos, lo cual de acuerdo a la doctrina internacional y a los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes para la época de los hechos, constituyeron actos de genocidio dirigido en contra del pueblo maya en Guatemala.

La Comisión considera que sólo desde esa perspectiva colectiva, fundada en la comprensión de los elementos socio-culturales característicos del pueblo maya como son su cosmovisión, espiritualidad y estructura social comunitaria, y en el reconocimiento de la magnitud de los actos genocidas cometidos en su contra, pueden determinarse unas medidas de reparación que tiendan a hacer desaparecer los efectos de las violaciones cometidas por el Estado de Guatemala.

En atención a las circunstancias propias del presente caso, la Comisión pasa a presentar sus conclusiones y pretensiones en relación con las medidas de indemnización y satisfacción y garantías de no repetición.

1. Medidas de compensación

La Honorable Corte ha establecido los criterios esenciales que deben orientar una justa indemnización en términos "suficientemente amplios" destinada a compensar económicamente, de una manera adecuada y efectiva, los daños sufridos con las violaciones "en la medida de lo posible".⁴⁰ Dicha indemnización tiene como objetivo primordial reparar los daños, materiales e inmateriales, sufridos por las partes lesionadas.⁴¹ El cálculo de los daños y perjuicios sufridos debe necesariamente ser proporcional a "la gravedad de las violaciones y del perjuicio resultante".⁴²

La Comisión es consciente del desafío que representa para la Honorable Corte estimar los daños materiales y morales ocasionados a los miembros de la comunidad de Plan de Sánchez, debido no sólo a los años transcurridos; a la tradición oral característica de su cultura que explica la imposibilidad de contar con documentos que acrediten las pérdidas materiales sufridas; al tipo de economía agrícola y pecuaria de la comunidad, en donde dejaron de producir por años; al terror experimentado durante los años viviendo en el monte contemplando su tierra abandonada, a los años pasados forzados a vivir en otras aldeas, obligados a patrullar con quenes fueron los victimarios de sus familiares más queridos; y en particular, por la magnitud de los actos de genocidio, en relación al cual le corresponde una

⁴⁰ *Supra* 38.

⁴¹ Aloeboetoe, *supra*, párrafos 47, 49.

0000767

En relación a los daños materiales y morales, la Comisión se permite recordar las palabras de los testigos, quienes en relación con el primer aspecto dejaron claro que los bienes a los que se refiere el daño emergente nunca fueron recuperados. En palabras de Buenaventura Manuel Jerónimo "nunca recuperamos lo que perdimos en esos días: casa, marranos, gallinas, ropas, joyas". Inclusive él dejó claro que aún cuando él tiene casa propia, muchos de los terrenos que pertenecían a su comunidad en la época de la masacre, aún no los han podido recuperar.

En cuanto al dolor ocasionado, más allá de la presunción sobre el sufrimiento de las víctimas por las violaciones de derechos humanos, la Honorable Corte pudo establecer de manera directa la profundidad y los efectos del dolor causado a los sobrevivientes de la masacre de Plan de Sánchez que fueron testigos de los horrores sufridos por sus seres más queridos, sus abuelos, sus madres, sus esposas, sus hijos, ante una impotencia y desamparo absolutos. Un dolor permanente, que ahoga, que paraliza, que inclusive ha llevado a querer atentar contra su propia vida. Un dolor que en el contexto de la cultura maya se expresa, en muchas ocasiones, de manera somática y que ocasionó enfermedades permanentes y/o recurrentes en numerosos miembros de la comunidad, incluso hasta el extremo de que la muerte de algunos ha sido asociada a ese sufrimiento extremo. Como ha sido demostrado, en situaciones como las vividas por los sobrevivientes y familiares de las víctimas, el dolor y sus efectos trascienden la esfera del individuo, a la del tejido familiar y comunitario.

En cuanto a los montos de la indemnización a los que tienen derecho los familiares de las víctimas, por concepto de los daños materiales e inmateriales, la Comisión se remite a los solicitados por los representantes de las víctimas en sus argumentos finales escritos. En este sentido, le asiste a la Comisión un profundo sentimiento de confianza en que al momento de fijar los montos por dichos conceptos, la Honorable Corte fundada en su sabiduría y experiencia utilizará los más firmes criterios de equidad.

2. Medidas de satisfacción y garantías de no repetición

La satisfacción ha sido entendida como toda medida que el autor de una violación debe adoptar conforme a los instrumentos internacionales o al derecho consuetudinario, que tiene como fin el reconocimiento de la comisión de un acto ilícito.⁴³ La satisfacción tiene lugar cuando se llevan a cabo tres actos, generalmente, en forma acumulativa: las disculpas, o cualquier otro gesto que demuestre el reconocimiento de la autoría del acto en cuestión; el juzgamiento y castigo de los individuos responsables y la toma de medidas para evitar que se repita el daño.⁴⁴

En este caso, la Comisión considera que procede, en primer término, una reparación colectiva, de carácter moral para la comunidad y para el pueblo maya, que simbolice el derecho de éstos a saber la verdad, el horror de los hechos y la garantía de no repetición.

En ese sentido, la Comisión entiende que como medida de satisfacción el reconocimiento de responsabilidad internacional realizado por el Estado en esta audiencia debe ser dado conocer a la opinión pública. Dicho reconocimiento de responsabilidad debe, además, ser explicado en sus alcances y consecuencias por un alto funcionario del Estado en la comunidad de Plan de Sánchez.

Asimismo, la Comisión solicita que el Estado guatemalteco formule un pedido de perdón a los familiares de las víctimas de Plan de Sánchez. Dicho pedido deberá ser transmitido directamente a todos los miembros de la comunidad en su aldea por un alto funcionarios del Estado.

Asimismo, la Comisión solicita a la Honorable Corte que en adición a las medidas específicas que los representantes de las víctimas requieran en su argumento final escrito, considere las siguientes:

a. Medidas destinadas a reparar el daño causado por la imposición del silencio sobre los hechos de la masacre

No se permitía que alguien hable de lo que pasó.⁴⁵

Se encuentra establecido que el manto de silencio y desinformación que sopesó sobre la comunidad de Plan Sánchez y la sociedad guatemalteca en general como resultado de la violencia y el terror institucionalizado. De acuerdo con los testimonios que obran en el expediente el ambiente de terror se intensificó con los hechos de la masacre y los posteriores actos de hostigamiento y persecución, puesto que durante varios años la zona se mantuvo militarizada y amenazada para impedir el intercambio de información u opiniones acerca de lo sucedido.⁴⁶ Asimismo, los testimonios hacen mención de que dicha práctica generaba un ambiente de desconfianza entre los miembros de la comunidad de Plan Sánchez modificando su costumbre comunitaria y fomentando el aislamiento.⁴⁷

La Comisión considera que una medida adecuada de reparación debe estar dirigida a que se cuente lo ocurrido, a concienciar al pueblo

⁴⁵ Testimonio de Juan Manuel Jerónimo ante la Corte Interamericana en audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

0000769

21

guatemalteco mediante "una difusión amplia, precisa y exacta", tal y como lo señalara el perito Augusto Williamsen.⁴⁸

b. Medidas destinadas a evitar la repetición de los hechos

*Yo ruego que en esta lucha que estamos haciendo se cumpla la justicia.*⁴⁹

La Honorable Corte ha establecido que la impunidad que constituye una infracción del deber del Estado que lesiona a la víctima, a sus familiares y al conjunto de la sociedad y propicia la repetición crónica de las violaciones de los derechos humanos de que se trata.⁵⁰ La jurisprudencia reciente de la Honorable Corte ha establecido expresamente la realización de la justicia como una forma de reparación. Específicamente en el Caso Mack Chang el Honorable Tribunal estableció que

*Toda persona, incluyendo a los familiares de víctimas de graves violaciones de derechos humanos, tiene el derecho a la verdad. En consecuencia, los familiares de las víctimas y la sociedad como un todo deben ser informados de todo lo sucedido con relación a dichas violaciones. Este derecho a la verdad ha venido siendo desarrollado por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos; al ser reconocido y ejercido en una situación concreta, ello constituye un medio importante de reparación.*⁵¹

La Comisión considera que el clamor de justicia de la comunidad de Plan de Sánchez resulta crucial tanto para la reconciliación, factor determinante para la recomposición del tejido social y el proceso de dignificación del pueblo maya que por factores racistas le ha sido sistemáticamente denegado el acceso a la justicia. La realización del derecho a la verdad y la sanción penal, tanto de los autores materiales como intelectuales de la masacre, constituye una medida crucial para garantizar que hechos tan atroces no vuelvan a ocurrir.

Es de destacar que de las 626 masacres registradas por la Comisión de Esclarecimiento Histórico en Guatemala, solo en una, la de Río Negro a la que hizo referencia Buenaventura Manuel Jerónimo en su testimonio, ha llegado a la etapa de juicio.

La declaración de la experta Nieves Gómez indica los profundos efectos de la impunidad de los actos genocidas en el pueblo maya, de ahí que la Comisión haga suya la exigencia de justicia de los familiares de las

⁴⁸ Declaración del perito Augusto Williamsen-Díaz ante la Corte Interamericana en la audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

⁴⁹ Testimonio de Buenaventura Manuel Jerónimo ante la Corte Interamericana en audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

⁵⁰ Corte IDH. Caso Marliza Urutia, sentencia de 27 de noviembre de 2003, párr. 176.

La declaración de la experta Nieves Gómez indica los profundos efectos de la impunidad de los actos genocidas en el pueblo maya, de ahí que la Comisión haga suya la exigencia de justicia de los familiares de las víctimas. De la prueba que obra en el expediente, es claro que existen elementos de juicio suficientes para adelantar con éxito una investigación seria y eficaz de la masacre, juzgar y sancionar a los responsables.

Por lo tanto, resulta crucial que la Honorable Corte ordene a las autoridades guatemaltecas superar todos los obstáculos que han impedido la individualización de los responsables, en particular, la negativa de las autoridades públicas, como es el caso del Ministerio de Defensa, a colaborar con la investigación y suministrar toda la información requerida por las autoridades judiciales con ese propósito.

3. Medidas de rehabilitación

a. Dirigidas al fortalecimiento de la transmisión de la cultura maya.

Nos quitaron el impulso de nuestra cultura.⁵²

En esos términos don Juan Manuel Jerónimo, líder desde su juventud por su compromiso comunitario, caracterizó el daño ocasionado a la cultura maya achí. El daño ocasionado al pueblo maya mediante la ejecución de cientos de miles de mujeres y ancianos transmisores orales naturales de las tradiciones, como lo explicó el experto Williamsen-Díaz en la audiencia pública, es casi irreparable.

Como medidas dirigidas al fortalecimiento de la transmisión de la cultura maya, la Comisión considera necesaria la implementación de políticas locales de difusión de las tradiciones comunitarias.

b. De salud y otras medidas de carácter comunitario

El dolor nunca se quita. Me enfermé del corazón.⁵³

La Comisión considera que entre las medidas de rehabilitación deben incluirse programas de salud familiar y comunitaria. Asimismo, se estima que estos programas de salud en el ámbito local deben tener una sensibilidad cultural para lo cual se deberían integrar componentes de la cosmovisión maya.

⁵² Testimonio de Juan Manuel Jerónimo ante la Corte Interamericana en audiencia celebrada el 22 de abril de 2004 en San José, Costa Rica.

⁵³ Testimonio de Narcisca Corazón Jerónimo ante la Corte Interamericana en audiencia celebrada

Asimismo, se solicita a la Honorable Corte que ordene a las autoridades guatemaltecas a diseñar en conjunto con las mujeres líderes de la comunidad, planes de ayuda a las mujeres víctimas de violación.

Finalmente, la Comisión quiere destacar las medidas de reparación comunitarias formuladas de manera espontánea y coincidente por los testigos Juan Manuel Jerónico y Buenaventura Manuel Jerónimo en beneficio de Plan de Sánchez: la construcción, dotación y puesta en funcionamiento una escuela, el suministro de agua potable, la pavimentación de carreteras, y la implementación de proyectos productivos.

La Comisión estima de crucial importancia que todas las iniciativas orientadas a reparar a las víctimas de la masacre, deben ser hechas en consulta con todos los miembros de la comunidad.

V. Petitorio

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicita a la Honorable Corte Interamericana que, con fundamento en los términos del reconocimiento de responsabilidad internacional formulado por el Estado de Guatemala en la audiencia pública celebrada el 22 de abril de 2004, en los hechos debidamente probados durante el proceso, así como en los argumentos de derecho expuestos en la demanda, en la audiencia pública y en el presente alegato final escrito, declare que:

- a. El reconocimiento de los hechos y su responsabilidad internacional por la violación a la Convención efectuado por el Estado de Guatemala surte plenos efectos jurídicos equiparables al allanamiento sobre el fondo del asunto; y en consecuencia.
- b. El Estado de Guatemala es responsable de una violación al derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana, en perjuicio de los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la masacre de Plan de Sánchez, por los actos de persecución militar que forzaron a los sobrevivientes de la masacre a desplazarse a zonas inhóspitas, por las amenazas de muerte proferidas por agentes del Estado.
- c. El Estado de Guatemala es responsable por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, así como del incumplimiento de la

0000772

24

artículo 1(1) del mismo instrumento, por la impunidad en que se encuentra la masacre de Plan de Sánchez cometida el 18 de julio de 1982.

- d. El Estado de Guatemala violó el derecho a la honra y a la dignidad consagrado en el artículo 11 de la Convención Americana.
- e. El Estado de Guatemala mediante prácticas genocidas incumplió la obligación de garantizar el artículo 12 de la Convención, en perjuicio de las víctimas de la masacre de Plan de Sánchez, consideradas individual y colectivamente, en su calidad de miembros del pueblo indígena maya por no respetar sus creencias culturales, espirituales y religiosas.
- f. El Estado de Guatemala incumplió las obligaciones consagradas en los artículos 13(2)(a) y 13(5) de la Convención Americana.
- g. El Estado de Guatemala violó el derecho a la libertad de asociación consagrado en el artículo 16(1) de la Convención Americana.
- h. El Estado de Guatemala violó los derechos consagrados en los artículos 21(1) y 21(2) de la Convención Americana, en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de la masacre de Plan de Sánchez, en especial, teniendo presente la particular relación de los pueblos indígenas con la tierra.
- i. El Estado de Guatemala, es responsable de violar el principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 24, en relación en el artículo 1(1) de la Convención, por los actos de discriminación cometidos en perjuicio de las víctimas sobrevivientes de la masacre y los familiares de las personas ejecutadas en la aldea de Plan de Sánchez, con motivo de su origen étnico.

Y ordene:

- j. Al Estado de Guatemala adoptar las reparaciones solicitadas tanto por los representantes de las víctimas como por la Comisión; así como pagar las costas originadas en la tramitación del caso tanto del proceso interno como del procedimiento ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que fuesen acreditadas por aquellos.